

Stephanie Leutert

Trump está equivocado: los migrantes son víctimas y no delincuentes

The New York Times, 20 de septiembre de 2018.

En junio, Josué, un hondureño de 21 años, llegó a una casa de seguridad en la ciudad fronteriza mexicana de Reynosa, en Tamaulipas. Estaba ahí con once migrantes centroamericanos más. Su familia había pasado el año anterior reuniendo los 3800 dólares indispensables para el último tramo de su viaje a Estados Unidos.

Sin embargo, la [casa de seguridad no era tan segura](#). A tan solo kilómetros de la frontera, su trayecto fue interrumpido cuando unos hombres armados entraron al inmueble, secuestraron a los migrantes y exigieron 1800 dólares más para liberarlos. Si sus familias no podían reunir el dinero, les advirtieron, entonces los matarían.

Todos los días, dramas y tragedias como esta les suceden a los migrantes hondureños, salvadoreños y guatemaltecos que viajan por México. La retórica del gobierno de Donald Trump en repetidas ocasiones ha vinculado a los migrantes con pandillas, violencia y delitos, y ha descrito a los inmigrantes como una amenaza a la seguridad pública. Sin embargo, de hecho, la mayoría de los centroamericanos que llegan a la frontera entre México y Estados Unidos no son perpetradores, sino víctimas de esa violencia, tanto en sus países de origen como durante su difícil trayecto a través del territorio mexicano.

A lo largo de las últimas tres décadas, los riesgos y peligros del viaje desde Centroamérica hasta la frontera sur de Estados Unidos han aumentado: el refuerzo de la observancia de la ley migratoria por parte de Estados Unidos y México ha orillado a los migrantes a tomar rutas más invisibles y riesgosas; además, la impunidad de la que gozan los criminales en México ha permitido que estos sigan en las calles.

No obstante, sin importar cuán abrumadores sean los riesgos ni cuán desafiantes sean las políticas, no han logrado reducir de manera significativa el número de centroamericanos que viajan hacia el norte. Lo único que ha cambiado es que cientos de miles de migrantes hacen el recorrido a través de rutas más peligrosas y clandestinas.

Para los desplazados centroamericanos, no hay un medio de transporte ni un itinerario únicos para cruzar México y llegar a Estados Unidos. Las experiencias de viaje cambian según su nacionalidad, género, edad e ingresos. Si un migrante centroamericano contrata a un contrabandista para atravesar México —el 60 por ciento dijo haberlo hecho en encuestas realizadas por el Colegio de la Frontera Norte—, las rutas también serán determinadas por los contactos y métodos de los traficantes. Sin embargo, todas tienen por lo menos algo en común: ninguna es segura y todas conllevan una serie de riesgos.

En cuanto los migrantes se acercan a la frontera entre México y Guatemala, los peligros comienzan. Para llegar a las ciudades mexicanas del sur, los migrantes que cuentan con un poco de dinero pueden tomar autobuses locales o taxis. Los que no tienen nada en los bolsillos deben ir a pie. Puede que tengan que caminar durante días por los costados de las autopistas, a menudo de noche para evitar que los detengan y para no exponerse al sol abrasador. Los funcionarios mexicanos han concentrado menos sus iniciativas de vigilancia en la frontera física y más en puestos de control en las carreteras que se encuentran a casi 50 o 160 kilómetros de la frontera en territorio mexicano, donde las

autoridades migratorias intentan identificar a las personas que transitan por el país sin los documentos necesarios.

En estas zonas desoladas del sur de México, los migrantes podrían ser víctimas de criminales como autoridades corruptas, grupos locales oportunistas y miembros de las pandillas MS-13 o Barrio 18, las mismas de las que quizá escapan y que operan en esta parte del país.

Ese fue el caso de Josué, a quien lo asaltaron criminales locales mientras recorría el tramo de 64 kilómetros de autopistas remotas entre El Ceibo, una ciudad fronteriza guatemalteca, y Tenosique, una ciudad al sur de México. Los ladrones salieron de un campo cercano y le quitaron sus pertenencias, incluso los zapatos que llevaba, dejándolo con el par raído y lleno de hongos de uno de los asaltantes. De acuerdo con fiscales en los estados sureños de Chiapas y Tabasco, estos robos y asaltos son bastante comunes. Además, las mujeres sufren tipos específicos de violencia: Médicos Sin Fronteras informó que un tercio de las migrantes sufren violaciones mientras están en México.

Para avanzar al norte, los centroamericanos más pobres suben al techo de vagones de una red de ferrocarriles de carga mexicanos (apodada La Bestia) y se exponen a la lluvia, el calor y los vientos gélidos, además del temor constante de resbalarse y salir disparados por un costado. También viajan muy alertas por los miembros de las pandillas o los guardias de seguridad que a veces suben a los trenes para extorsionar o asaltar a los viajeros. Dados los riesgos extremos —además de las medidas enérgicas impulsadas en 2014 por funcionarios mexicanos mediante el [Programa Frontera Sur](#), para detener el flujo migratorio a bordo de los trenes—, solo el 12 por ciento de los migrantes centroamericanos en 2017 informó a los investigadores del Colegio de la Frontera Norte haber tomado los trenes en algún punto de su viaje.

Los migrantes que tienen un poco más de dinero se transportan en autos privados, autobuses o tráileres y utilizan las grandes autopistas de sur a norte; pasan por los puntos de control migratorios en México haciéndose pasar por lugareños o sobornando a policías corruptos. Algunos evitan por completo los puntos de control y los rodean a pie. Viajar en vehículos generalmente es más seguro para ellos, pero aun así pueden enfrentar dificultades como la calidad variable de la comida, pésimos sitios donde dormir o maltrato por parte de sus guías u otros migrantes.

En la frontera con Estados Unidos, los agentes fronterizos y una serie de [radares, sensores y otros tipos de tecnologías](#) buscan frenar el cruce clandestino de migrantes a Estados Unidos. En respuesta, algunos centroamericanos intentan cruzar por las zonas remotas en los extensos desiertos de California o Arizona, o cerca de la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez. Otros piden asilo en los puertos de entrada. No obstante, la mayoría viaja por la costa del golfo de México para llegar a Reynosa, Tamaulipas. Esta ciudad comparte frontera con McAllen, Texas, al sur del valle del río Bravo. En el año fiscal 2017, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos informó que aprehendió a dos tercios de los migrantes clandestinos centroamericanos (104.305 en total) en esta sección de 500 kilómetros de la frontera.

En el lado mexicano de la frontera cerca de Reynosa, las organizaciones de narcotraficantes —sobre todo el Cártel del Golfo y los grupos disidentes de los Zetas— controlan el territorio y las rutas de contrabando, además de fungir como agentes fiscales extraoficiales. Estos grupos les imponen un último desafío de seguridad a los migrantes y cometen su delito distintivo: el secuestro. Su presencia le da a esta zona su infame estatus como el lugar donde ocurren más secuestros de migrantes en todo el país.

Desde 2011, el Instituto Nacional de Migración en México ha documentado a 1034 víctimas de secuestro en Tamaulipas, 75 por ciento del total de migrantes víctimas de ese delito en el país. Las mujeres y los menores de edad conforman más de un cuarto de los afectados.

Sin embargo, las cifras oficiales apenas revelan la superficie de los crímenes cometidos contra los migrantes en México. Los centroamericanos rara vez denuncian los delitos a las autoridades mexicanas debido a falta de confianza, miedo a repercusiones o conocimiento limitado del sistema judicial del país. Josué es un buen ejemplo. Pudo escapar de sus captores después de que la Policía Federal interceptó un auto que lo llevaba a una segunda casa de seguridad, pero decidió no denunciar el secuestro porque le preocupaba su seguridad.

Cuando los migrantes denuncian estos delitos, pocos llegan a investigarse o procesarse. En julio de 2017, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos [informó](#) que solo el uno por ciento de los delitos cometidos contra migrantes en México termina en una sentencia.

¿Qué obliga a la gente a enfrentar estas condiciones a sabiendas o, peor aún, llevar a sus hijos consigo? Para los migrantes centroamericanos, hay un abismo entre su deseo de seguridad, trabajo y reunificación, y su capacidad de cumplir esos sueños dentro de sus propios países o legalmente en Estados Unidos.

En Reynosa, Josué se preparaba para tratar de recorrer el trayecto de la frontera a Houston. Al igual que cientos de miles de migrantes centroamericanos más que toman las mismas rutas y escapan de la violencia en casa o en su viaje, estaba seguro de que la travesía valdría la pena. La esperanza de una vida mejor y más segura en Estados Unidos era más fuerte que el miedo a cualquier peligro a lo largo del camino.

Stephanie Leutert es directora de la Iniciativa para la Seguridad en México del Centro Robert S. Strauss para la Seguridad Internacional en la Universidad de Texas campus Austin.